

Santiago, diecinueve de noviembre de dos mil veinte.

No siendo coincidente la fecha de dictación de la sentencia definitiva, incorporada con esta fecha, con aquella que se fijó en la audiencia de juicio y, para los efectos de notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código del Trabajo, rija para efectos de notificación de la referida sentencia la indicada en la audiencia de juicio.

MATERIA: TUTELA LABORAL CON OCASIÓN DEL DESPIDO, EN SUBSIDIO DESPIDO INJUSTIFICADO.

DEMANDANTE: ALBERTO CATALAN VARGAS y OTRO.

DEMANDADA: COMUNIDAD EDIFICIO MAC-IVER 544.

RUC N°: 21-4-0322021-0.

RIT N°: T-255-2021.

Santiago, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y OIDOS LOS INTERVINIENTES:

PRIMERO: Que comparecen don Alberto del Carmen Catalán Vargas, y Rodrigo Paz Catalán, trabajadores, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Ricardo Cummings 1355, of.33, e interponen denuncia por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido injustificado en procedimiento de tutela, en contra de la Comunidad Edificio Mac-Iver 544, representada por su



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
administrador Manuel Barraza Foster, domiciliados en Mac-Iver 544, 8° piso, comuna y ciudad de Santiago, fundada en los siguientes hechos:

DON ALBERTO DEL CARMEN CATALÁN VARGAS: Indica que, el 1° de octubre de 1975, entró a trabajar en calidad de conserje a dicha comunidad desempeñándose en dicho cargo hasta el 18 de diciembre de 2020 fecha en que fue desvinculado, sin razón ni fundamento alguno, percibiendo una remuneración principal correspondiente al mínimo, e incluyendo en el contrato el uso de un pequeño departamento en el edificio perteneciente a dicha comunidad.

Agrega que su descanso semanal y vacaciones anuales, debía estar regido en los mismos términos en que se debía fijar su horario de trabajo; debiendo cumplir las órdenes e instructivos que le daba la comunidad a través de su administrador.

Relata que el administrador le señaló que debía abandonar su lugar de trabajo sin que mediara razón alguna.-

En cuanto al horario laboral afirma que este nunca fue respetado ya que se le despertaba a las 2 o 3 de la mañana para solucionar cualquier problema que se suscitara o que tuviera alguno de los residentes

Declara que, previo al despido propiamente tal su ex empleador incurrió en una serie de conductas tipificadas en la ley como acoso moral laboral - Mobbing - el que se concretó en el trato hostil, el aislamiento, la negativa a otorgarle funciones propias del cargo, la falta de medidas para detener y/o controlar el ambiente de trabajo irrespetuoso respecto de nuestras personas.

Alega que ambos demandantes, permanentemente fuimos requeridos para labores irrelevantes en cualquier día y hora, siempre cumplieron con las órdenes y siempre estuvo el edificio en condiciones de higiene y mantención adecuadas.

Señala que, el hecho de que fuera relevado de su cargo, por razones arbitrarias y antojadizas, ajenas a su desempeño laboral, resulta en una conducta



totalmente discriminatoria, la cual le ha afectado gravemente mi dignidad y la de su familia. De esta forma al ver vulnerada su dignidad se ha producido un menoscabo en mis derechos fundamentales.-

Refiere que se le vulneró el DERECHO A INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA, pues se le ha denigrado en su calidad de trabajador al incurrir en serias conductas de acoso laboral, descalificándolo permanentemente por su edad, discriminándolo, asignándole funciones de secretaría, todo ello de forma caprichosa y arbitraria, creándole continuamente situaciones de estrés y afectación.-

El DERECHO A LA HONRA, se le vulneró pues la administración incurrió en un sin número de agravios, fundamentalmente al solicitarle tareas propias de su cargo, realizando críticas injustificadas y entorpeciendo deliberadamente su desempeño, con el único objetivo de crear una falsa imagen.-

Considera vulnerado el derecho a no discriminación, por su avanzada edad.

Cita como indicios suficientes de la vulneración, los siguientes:

1. En 45 años de trabajo sólo en dos oportunidades tuvo vacaciones efectivas.
2. Nunca se les pagó horas extraordinarias
3. El hecho de no asignarle las tareas propias del cargo debiéndose delimitar cuales eran estas.
4. El de asignarle tareas propias de secretaría.
5. El hecho de haber denostado en todos los ámbitos a su familia.
6. El hecho de haber comunicado a la comunidad que había renunciado, hecho absolutamente falso.

Demanda los siguientes conceptos:



a) Indemnización por lucro cesante: Por el monto equivalente a su remuneración por todos los meses desde que fue despedido hasta que la sentencia de autos quede ejecutoriada y la parte demanda haya cumplido es decir el equivalente a \$ 595.000 que fue su última remuneración, lo que da en total la suma de \$26.775.000, más todas las remuneraciones que se devenguen en el transcurso del juicio.

b).-Indemnización por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido equivalente al mes por año, de 45 meses de remuneración, la suma de \$ 26.775.000.-

c) Por conceptos de Horas extras, \$3.776.229.-

d) Por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo \$ 595.000.

Demanda por daño moral, el equivalente a todas las sumas demandadas.

En cuanto al demandante RODRIGO PAZ CATALÁN: señala que nació en la familia que vivía en la comunidad demandada. Indica que, los residentes le solicitaban favores de poca trascendencia como comprar el diario, insumos de primera necesidad.

Hace presente que, transcurrido el tiempo en estas condiciones y al asumir la administración el Sr. Manuel Barraza, le informó que debía realizar determinadas tareas dentro del edificio, tales como ayudar a mantener aseo, sacar container de basura y cualquier otra actividad a la que estaba obligado su abuelo, siempre bajo la amenaza que de no hacerlo la familia sería expulsada del edificio.-

En el 2015 se le informó que su remuneración , sería el ingreso mínimo, a partir de dicha fecha tanto mi abuelo como este compareciente, sin horario establecido en las mismas condiciones que el otro compareciente, sin remuneración ni ninguna de las garantías laborales que le otorga la ley, ni tampoco cumpliendo con el deber de integrarle las cotizaciones previsionales a que estaban obligados, además de los continuos maltratos verbales y



descalificatorias amenazas permanentes de que debíamos cumplir dichas órdenes de lo contrario debíamos abandonar el departamento.

Señala que la vulneración a todas las garantías establecidas en la constitución y las leyes que le fueron vulneradas al otro compareciente, su abuelo, le fueron hechas a él.

Solicita se condene a la demandada a las siguientes prestaciones:

a) Indemnización por lucro cesante, por un monto equivalente a su remuneración por todos los meses desde que fue despedido hasta que la sentencia de autos quede ejecutoriada, lo que da en total la suma de \$23.508.00, más todas las remuneraciones que se devenguen en el transcurso del juicio.

b) Indemnización por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido equivalente al mes por año, de 6 meses de remuneración, por la suma de \$1.959.000.-

c) Por conceptos de horas extras, \$2.072.166.

d) Por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo a \$326.500.-

Daño Moral: el equivalente a todas las sumas demandadas.-

Previas consideraciones de derecho, solicita que se declare:

Que han sido víctimas de vulneración de derechos fundamentales garantizados por la Constitución y la Ley con ocasión del despido.

Que, producto de las actuaciones lesivas de su ex empleador con ocasión del despido se les ha vulnerado la integridad física y psíquica, su derecho a la igualdad y su protección y derecho a la honra.

Que, corresponde la aplicación de las medidas de reparación del daño ocasionado en la forma solicitada.-



EN EL PRIMER OTROSÍ, subsidiariamente deduce demanda de cobro de prestaciones por despido injustificado, consistente en:

Alberto Catalán:

- 1.) Indemnización por año de servicio por despido injustificado la suma de \$26.775.000, que a corresponden a 45 años que preste servicios a la demandada, toda vez que se mantienen las normas que regulaban al respecto antes de la dictación del DL 2200 de 1978.-
- 2.) La indemnización sustitutiva del aviso previo \$595.000.
- 3.) Cotizaciones previsionales del periodo trabajado.
- 4.) Horas extraordinarias \$3.776.229, esto equivale al total de horas extraordinarias que se pueden cobrar.
- 5.) Vacaciones descanso anual, y progresivas la suma de \$26.775.000.

Respecto del actor Rodrigo Paz:

- 1.) Cobro de Remuneraciones adeudadas: la suma de \$23.508.000, equivalente a 6 años.
- 2.) Indemnización por año de servicio por despido injustificado la suma de \$1.959.000, que corresponden a 6 años que prestó servicios a la demandada.
- 3.) La indemnización sustitutiva del aviso previo \$326.500.
- 4.) Pago de cotizaciones previsionales adeudadas.
- 5.) Horas extraordinarias \$2.072.166.
- 6.) Vacaciones descanso anual de \$1.632.500, esto equivale al total de horas extraordinarias que se pueden cobrar.



Todos estos Ítems, deben ser reajustados y aumentados en la forma que establece el art. 168 del Código de Trabajo en su letra b).

SEGUNDO: Que la demandada **COMUNIDAD ENRIQUE MAC- IVER 544**, contesta la demanda solicitando que sea rechazada en todas sus partes, con expresa condena en costas, por los siguientes fundamentos:

Opone excepción de incompetencia absoluta del tribunal respecto a la denuncia por vulneración de derechos fundamentales con ocasión de despido interpuesta por el señor Rodrigo Paz Catalán, ya individualizado en estos autos, solicitando sea acogida en todas sus partes con expresa condenación en costas, fundada en que, es falso que don Rodrigo Paz Catalán haya trabajado alguna vez para la comunidad.

Explica que, cuando don Alberto Catalán comenzó a trabajar en la comunidad además de pagarle su sueldo se le entregó en usufructo el departamento de conserjería, en dicho inmueble vivió con su cónyuge y con su nieto, don Rodrigo Paz, al parecer, desde que éste nació. Agrega que, en reiteradas ocasiones requirió ser contratado, sin embargo, se le negó toda vez que mantenía malos tratos con algunos residentes y, en especial, con su persona.

En virtud de lo anterior, solicita se acoja la referida excepción respecto de este demandante.-

En el PRIMER OTROSÍ, opone excepción de prescripción respecto a los montos solicitados por don Rodrigo Paz Catalán y por don Alberto Catalán Vargas, solicitando ésta sea acogida, fundada en que los denunciantes señalan de forma vaga y escueta todos los hechos y peticiones, en este sentido no se entiende cómo calcularon las indemnizaciones solicitadas. Sin embargo, se vislumbra con claridad y en razón de los altos montos demandados que algunas de las indemnizaciones se encuentran prescritas.



Lo anterior, lo señala sobre el concepto feriado que se pide. También sobre las horas extraordinarias a las que se hace mención en la denuncia y en la demanda, que tienen un valor excesivo, por lo que supone se están cobrando horas que superan el plazo de seis meses establecido en el artículo 510 inciso cuatro.

En definitiva, solicita que se declaren prescritas todas las sumas reclamadas por los actores que exceden los tiempos señalados en el artículo 510 del Código del Trabajo.

En el SEGUNDO OTROSÍ, contesta la denuncia de tutela de derechos fundamentales con ocasión de despido injustificado, negando categóricamente todas las afirmaciones hechas contra la comunidad respecto a la vulneración de derechos que invoca.-

Afirma que, a diferencia de lo que se describe en la demanda, don Alberto y el Administrador, tuvo una muy buena relación, casi fraternal. Explica que, el trabajo de don Alberto consistía en asear espacios comunes en la mañana, lo que involucraba unas dos horas de trabajo, sacar la basura en la tarde en lo que ocupaba, también, unas dos horas, repartir los comprobantes de los gastos comunes y algún requerimiento esporádico. Indica que, en la práctica, si bien su horario de trabajo no era fijo, no era superior a cuatro horas diarias.

Respecto a don Rodrigo Paz Catalán, nieto de don Alberto, niega que haya trabajado en el edificio, él nunca fue trabajador de la comunidad, sino que sólo vivía en el departamento que se le había entregado a don Alberto. Es más, muchas veces solicitó trabajar en la comunidad, pero se le negaba debido a que no tenía buenos tratos con algunos residentes.

Hace presente que, cuando comenzó la pandemia, en marzo de 2020, don Rodrigo encerró casi por completo a don Alberto en su departamento.- Es así como al inicio de la pandemia don Alberto comienza a cumplir sus funciones en menor medida (ya no se le veía en el edificio), sin embargo, la comunidad



continuaba pagándole el mismo sueldo. Asimismo, don Rodrigo empezó con un trato hostil hacia su persona, insultándolo constantemente.

Es así como don Alberto realizó sus funciones en menor medida que antes en la comunidad desde que empezó la pandemia hasta que se retiró voluntariamente de su trabajo

Expone que, como don Alberto estaba decidido a abandonar su lugar de trabajo le solicitó que presentara una carta de renuncia y que se le pagaría una indemnización de \$5.000.000 por todos los años de servicios que prestó a la comunidad, esta oferta fue verbal. El pago sería al momento de que firmara la renuncia.

Afirma que, el 18 de diciembre se mudó el demandante Catalán a su departamento en Diagonal de Cervantes, abandonando de facto su lugar de trabajo, pero dejando varias de sus pertenencias en el departamento de conserjería.

En definitiva reitera que, don Alberto se fue de la comunidad, por su propia voluntad, a mediados de diciembre del año pasado y nunca firmó la carta de renuncia (y tampoco fue despedido), simplemente hizo un abandono en sus funciones, no obstante, dejó distintas pertenencias en el departamento de conserjería. Por su parte, don Rodrigo continuó habitando el departamento, sin poseer ningún título que justificase su ocupación, hasta el mes de enero de 2021.-

En lo que concierne a las vacaciones, estas siempre fueron tomadas y pagadas, siendo absolutamente falso que sólo en dos momentos éstas fueron efectivas.

Asimismo, reitera que Rodrigo Paz nunca trabajó en la comunidad y que él era quien tenía malos tratos.

Mas adelante, alega que, la denuncia presentada no señala cuál fue la vulneración ocasionada con ocasión del despido, sino que ella sólo hace mención



a supuestos maltratos que fueron efectuados dentro de la supuesta relación laboral, por lo que el libelo no contiene una exposición clara ni circunstanciada de los hechos en que se funda la acción ni existen antecedentes suficientes en el mismo que permitan entender con claridad cuál sería el pretendido maltrato laboral de que habría sido objeto, ni la forma en que todas las situaciones vagas, genéricas e imprecisas que indica en el libelo habrían llevado a su despido como consecuencia de este supuesto maltrato.

Por lo anterior, y en el caso improbable que no sea aceptada la incompetencia absoluta del tribunal, sostiene que la demanda carece de los requisitos básicos del artículo 446 N° 4 en relación al artículo 490, ambos del Código del Trabajo, debiendo así rechazar, la demanda.-

Además señala que los hechos relatados por los denunciante son confusos y presentan claras contradicciones, las peticiones del libelo no son precisas ni concretas lo que infringe el artículo 446 N° 5 del Código del Trabajo.

También alega ausencia de antecedentes para la acción de tutela, incumpliendo los artículos 490 y 493 del Código del Trabajo,

En razón de lo anterior, pide el rechazo de plano la acción interpuesta por supuesta vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, 4 y 16 de la Carta Fundamental, por no contener indicios de vulneración y, en el caso improbable de que no sea rechazada, corresponderá a los denunciante la carga de acreditar la existencia de la pretendida vulneración.

Sin perjuicio de lo anterior, niega todos los hechos que denuncian los actores y pide el rechazo de todas prestaciones que reclaman.-

Asimismo controvierte el cálculo de todos los conceptos demandados por ambos actores, haciendo presente además que la remuneración del demandante Catalán ascendía a \$ 395.000 y no a \$595.000 como este indica.-



Por otro lado, también hace presente que, los denunciantes entablan mal la acción para solicitar la indemnización por vulneración de derechos pues no solicitaron la indemnización por años de servicio. Es por lo anterior, que en caso alguno les correspondería indemnización por concepto de años de servicio ya que de otorgárselas se caería en vicio de ultrapetita, por lo que debe ser rechazada y con costas.

En cuanto a las horas extras, sostiene que, el libelo no contiene relación alguna de hechos ni expone las consideraciones de derecho que fundarían las pretensiones de los denunciantes respecto a este concepto, por lo que debe ser desestimado.-

Por último, señala que, los denunciantes no señalan un monto específico de daño moral, sino que solamente dicen que éste es el equivalente a las sumas demandadas. En este entendido, el daño moral no tendría cabida, toda vez que hacen referencia a él como la sumatoria de las peticiones anteriores, sin que tenga vida propia. El daño moral debe entenderse como una indemnización de carácter no patrimonial, pero en el caso de autos los denunciantes señalan que es el mismo al resto de las indemnizaciones las que sí tienen un contenido patrimonial.

Sin perjuicio de lo anterior, alega que el daño moral es del todo incompatible con el procedimiento de tutela, ya que este procedimiento tiene una norma específica el cual regula el monto de la indemnización por vulneración de derechos, así nuestra legislación de forma expresa establece como sanción única pagar una indemnización compensatoria correspondiente desde 6 a 11 meses de remuneración.

Por lo demás, en ninguna parte del libelo se señala cuáles serían los conceptos por los que se solicita el daño moral.

Asimismo, en lo que se refiere al despido, lo niega nuevamente, sostiene que el contrato de trabajo aún se encuentra vigente, pues no ha mediado despido ni renuncia, además el denunciante continúa usando el departamento de



conserjería (que siempre fue parte de su remuneración) y se le pagaron las cotizaciones de salud por los meses de enero y febrero del presente año. Agrega que el demandante estaría haciendo uso de un permiso sin goce de remuneraciones, figura que no se encuentra prohibida, y que constituye una suspensión convencional de la relación laboral, cesando algunos efectos del contrato de trabajo de forma temporal sin afectar la vigencia del mismo.

Declara que si bien, es efectivo que cuando la comunidad se enteró de la presente demanda cesó su pago de cotizaciones, toda vez que entendió que la voluntad del denunciante es poner, definitivamente, fin a la relación laboral. En tanto niega nuevamente la existencia de relación laboral con el señor Rodrigo Paz pues jamás trabajó en la comunidad, sólo vivía en el departamento de conserjería que tiene en usufructo don Alberto Catalán.

Previos fundamentos de derecho, solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas.-

TERCERO: Que en la audiencia preparatoria llamadas las partes a conciliación esta no prosperó.-

Que se fijaron como hechos no controvertidos los siguientes: 1. Existencia de la relación laboral entre la demandada y el trabajador don Alberto Catalán y 2. El trabajador desempeñaba funciones como conserje.

CONVENCION PROBATORIA: 1. La fecha de inicio de los servicios del demandante don Alberto Catalán es el 01 de octubre de 1975.

En tanto se establecieron los hechos a probar que siguen: 1. Remuneración percibida por el señor Alberto Catalán, 2. Existencia de la relación laboral entre la denunciada y don Rodrigo Paz, en la afirmativa, fecha de inicio, continuidad, funciones desempeñadas y remuneración percibida, 3. Hechos en que se fundamenta la acción de tutela o vulneración de derechos fundamentales, efectividad de las mismas, pormenores y circunstancias, y en la afirmativa, que las



mismas constituyen una vulneración a las garantías constitucionales previstas en los numerales primero y cuarto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o del artículo segundo del código del trabajo, 4. Respecto de los trabajadores don Alberto Catalán y don Rodrigo Paz, parte que puso término a la relación laboral, fecha, cumplimiento de las formalidades legales, causal invocada, pormenores y circunstancias, 5. Procedencia del lucro cesante demandado, 6. Si se adeuda a los trabajadores horas extraordinarias, en la afirmativa cantidad de horas laboradas por los demandantes, 7. Si se adeuda a los demandantes feriado legal o si las mismas fueron usadas o compensadas, 8. Si se adeudan remuneraciones al trabajador Rodrigo Paz en los términos solicitados en la demanda, 9. Si se adeuda a los trabajadores las cotizaciones de seguridad social por el periodo trabajado y 10. Si los denunciados por estos como vulneratorios a sus garantías constitucionales sufrieron un daño moral.

CUARTO: Que, para acreditar sus alegaciones la parte **demandante** rindió en la audiencia de juicio prueba I.- Documental: la que incorporó mediante su lectura resumida consistente en el contrato de trabajo del demandante Alberto Catalán.-

Testimonial de doña María Ignacia Rodríguez Espinoza, don Patricio Molina González y don Lautaro José Vergara Cofré, quiénes declararon en síntesis:

María Ignacia Rodríguez Espinoza: “ Mi domicilio es Enrique Mac Iver 544 depto. G, yo vivo ahí hace 4 años. Conozco al señor Catalán era conserje hasta fines de 2020, también conozco al señor Paz es nieto, también ejercía funciones de conserje. Prestaban servicios todo el día, incluso en la noche. El señor Paz comentaba que tenía problemas con el pago de sus remuneraciones y cotizaciones. En conversación supe que se despidió a don Alberto, pero oficialmente no supimos nada.-



Ellos dos vivían en el piso 8° , no sé en qué condiciones. Entiendo que el sueldo de don Alberto era cercano a los \$ 400.000.- Entiendo que Rodrigo Paz, sí recibía instrucciones del administrador del Edificio.-

Luego Patricio Molina González, afirma: “Conozco a los actores, los ubico en el Edificio de Mac Iver, fui muchas veces a ese Edificio, tenía contacto con don Roberto, que vivía en ese edificio. A los demandantes los vi haciendo aseo. A Rodrigo Paz lo vi sacando bolsas de basura. No sé cuanto ganaban.-

Finalmente don Lautaro José Vergara Cofré, declara: “Mi domicilio es Mac Iver 544 depto F, vivo ahí desde el año 90. Si conozco a don Alberto toda la vida fue conserje y Rodrigo, es su nieto. Hacía actividad propia de su abuelo. Era trabajo de 24 horas mas o menos. No se tomaban vacaciones. Ellos vivían ahí mismo en el último piso del Edificio.-

Finalmente solicitó exhibición documental referida a documentos o libros que correspondan y que digan relación con la contratación de personal, cotizaciones previsionales, liquidaciones de remuneración y comprobantes de feriados para los trabajadores demandantes. No exhibe.

QUINTO: Que la **demandada**, incorpora como prueba documental, 1. Copia de contrato de trabajo de fecha 01 de octubre de 1975 entre Comunidad Edificio Mac-Iver 544 y don Alberto Catalán Vargas para el cargo de auxiliar de aseo y otros, 2. Cartola de cotizaciones FONASA pagadas año 2020 a don Alberto Catalán y 3. Recibos gastos comunes en los que consta el sueldo de don Alberto Catalán y algunos bonos.

Además aportó el testimonio de don Saul Olivas Ortíz y de don Juan Pablo Cares Monsálvez quiénes declaran en síntesis:

Don Juan Saul Olivas Ortíz, señala: “ Conozco a los demandantes, trabajo hace muchos años haciendo arreglos en el Edificio, ambos trabajaban para la Comunidad. El señor Catalán estaba cansado quería irse a descansar.



En tanto Juan Pablo Cares Monsálvez, afirma: “ Conozco a los demandantes. Don Alberto era el Conserje y Rodrigo su nieto. Yo vivo en el Edificio. Rodrigo no tenía relación laboral con la comunidad. No sé porque terminó la relación laboral con el señor Catalán.

Finalmente incorpora oficio de FONASA, respecto del demandante Alberto Catalán.-

EN CUANTO A LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION:

SEXTO: La parte demandada opuso excepción de prescripción del artículo 510 del Código del Trabajo, tanto respecto de los feriados que se reclaman mas allá de dos años y también las horas extras por un plazo superior a seis meses.

SEPTIMO: Que la norma del art. 510 CT, establece un plazo de prescripción de 6 meses, el que debe contarse desde la terminación de los servicios, luego el inciso 2° fija un plazo de 2 años contados desde que los derechos se hicieron exigibles. Vale decir, estando vigente el contrato el dependiente tiene dos años para reclamar por los derechos incumplidos y luego de terminado tiene un plazo de 6 meses para esos efectos.

En consecuencia, mientras esté vigente la relación laboral los derechos prescriben en dos años desde que se hicieron exigibles, en tanto no existe plazo para ejercer la acción.

En cambio, extinguida la relación laboral, los derechos también prescriben en dos años desde que se hicieron exigibles, en tanto que la acción para exigir su cumplimiento prescribe en seis meses, contados desde la terminación de los servicios.

Por lo tanto, se acogerá la referida excepción de todo el período que excede de dos años contados hacia atrás desde la notificación de la demanda.



A su vez y de conformidad al inciso 4° de la misma norma legal el plazo para reclamar el pago de horas extras prescribe en seis meses desde que se hicieron exigibles. En consecuencia, también se encuentra prescrito todo aquello que exceda de seis meses desde la notificación de la demanda.-

EN CUANTO AL FONDO:

OCTAVO: Que primeramente en cuanto a la existencia de relación laboral con el actor Rodrigo Paz, señala la demanda lo que sigue en lo pertinente:” *al asumir la administración el Sr. Manuel Barraza, me informó dicho Sr. que debía realizar determinadas tareas dentro del edificio, tales que ayudara a mantener aseo, sacar container de basura y cualquier otra actividad a la que estaba obligado mi abuelo, siempre bajo la amenaza que de no hacerlo mi familia sería expulsada del edificio, obligaciones que muchas veces interfirieron en mis estudios, por lo que en muchas actividades debí optar entre ir a clases y / o cumplir las tareas encomendadas.*

Dadas así las cosas, a principios del año 2015, el administrador Sr. Barraza me comunico que todas las ordenes debía cumplirse todas las ordenes que se me daban porque eran parte de mis obligaciones, a lo que di mi asentimiento, consultando cual sería mi remuneración, señalándoseme que sería el ingreso mínimo, a partir de dicha fecha le requerí permanentemente el cumplimiento de mi contrato y pago de mis remuneraciones, lo que se fue postergando indefinidamente; las órdenes por parte de la administración y residentes, comenzaron cada vez a ser más imperativas generándome una subordinación respecto de estas personas, más aún las órdenes las teníamos que cumplir indistintamente, tanto mi abuelo como este compareciente, sin horario establecido en las mismas condiciones que el otro compareciente, sin remuneración ni ninguna de las garantías laborales que me otorga la ley, ni tampoco cumpliendo con el deber de integrarme las cotizaciones previsionales a que estaban obligados, además de los continuos maltratos verbales y descalificatorias



amenazas permanentes de que debíamos cumplir dichas ordenes de lo contrario deberíamos abandonar el departamento..”.-

En este sentido, la parte demandante, no indica la fecha de inicio de la relación laboral que alega, tampoco indica el monto de la remuneración que percibía o que debía percibir, no detalla las circunstancias del supuesto despido, solo indica que realizaba labores similares a su abuelo.-

Debe tenerse presente, que para que una persona pueda ser considerada trabajadora de otra debe prestar a ésta servicios personales, ya sean intelectuales o materiales, mediante subordinación o dependencia, recibiendo a cambio de dicha prestación una remuneración determinada. En otros términos para que una persona detente la calidad de trabajador, se requiere: a) que preste servicios personales; b) que la prestación de dichos servicios las efectúe bajo vínculo de subordinación o dependencia; y c) que como retribución a los servicios prestados reciba una remuneración determinada.

En relación con el requisito signado en la letra b), cabe destacar que la subordinación o dependencia se materializa a través de diversas manifestaciones concretas, tales como la continuidad de los servicios prestados, la obligación de asistencia del trabajador, el cumplimiento de un horario de trabajo, la supervigilancia en el desempeño de las funciones, la subordinación a reglas y controles de diversa índole, circunstancia esta última que se traduce en el derecho del empleador a dirigir al trabajador, impartiendo órdenes o instrucciones, principalmente acerca de la forma y oportunidad en la ejecución de las labores y en el deber del trabajador de acatar y obedecer.

Que corresponde al actor acreditar las circunstancias anteriores, para lo cual aporta el testimonio de doña María Ignacia Rodríguez, don Patricio Molina y don Lautaro Vergara. Los tres están contestes en que el demandante Rodrigo Paz, es nieto del señor Catalán, dicen que realizaba labores similares, ninguno



detalla los pormenores de esta prestación de servicios, y sí afirman que vivían ambos en el mismo Edificio.-

De esta manera, los testigos, sitúan al actor Rodrigo Paz en el Edificio, afirman que realizaba labores similares a su abuelo, tales como sacar basura y que ambos vivían en el piso 8° del Edificio.

Estima esta juez la prueba aportada es insuficiente para dar por establecida la relación laboral que se alega respecto de este demandante, máxime si se trataba del nieto del demandante Alberto Catalán y vivían en el mismo edificio, lo que se traduce en que perfectamente, podría colaborar con su abuelo. Además de ello, llama la atención que recién una vez que terminó la relación con su abuelo haya decidido reclamar remuneraciones que según indica no se le habrían pagado durante seis años, lo que no se condice con las reglas de la lógica, ni las máximas de experiencia.-

En consecuencia se procederá al rechazo de la demanda a su respecto.

NOVENO: En lo que se refiere a los hechos en se funda la acción de tutela, efectividad de los mismos, pormenores y circunstancias cabe señalar lo que sigue:

a) El demandante Alberto Catalán refiere en su denuncia que, fue objeto de un “Despido Lesivo”, que es aquel despido que se funda o motiva en una conducta del empleador que vulnera o restringe desproporcionadamente un derecho fundamental del trabajador de aquellos protegidos por la acción de tutela. Afirma que previo al despido propiamente tal su ex empleador incurrió en una serie de conductas tipificadas en la ley como acoso moral laboral - Mobbing - el que se concretó en el trato hostil, el aislamiento, la negativa a otorgarle vacaciones, funciones propias del cargo, la falta de medidas para detener y/o controlar el ambiente de trabajo irrespetuoso respecto de su persona. Agrega que permanentemente fue requerido para labores irrelevantes en cualquier día y hora. Indica también que se le sugirió retirarse en forma reiterada dada su avanzada



edad. Además que se le expuso a situaciones de humillación y escarnio en su propia casa siendo tratado agresiva y groseramente.-

b) Debe tenerse presente que el procedimiento de tutela no busca desconocer las potestades empresariales, sino que por el contrario, su objetivo es conocer y sancionar aquellas afectaciones graves, de envergadura, intolerables o como señala el inciso tercero del artículo 485 del Código del Trabajo para los casos en que se limita el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador, sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. En consecuencia, las molestias de menor envergadura que pudiesen sufrir alguno de estos derechos, queda excluida de la misma. Lo anterior no obsta en modo alguno a la posibilidad de que estas afectaciones, produzcan alguna consecuencia indeseada, de acuerdo a las especiales particularidades de quien se ve enfrentado dentro de la organización empresarial, a situaciones o restricciones que fuera de este ámbito serían inaceptables. En efecto, lo señalado no significa un desconocimiento de la ciudadanía en la empresa, sino que por el contrario, una constatación de que en la práctica se produce constantemente una tensión entre derechos que colisionan entre ellos, por un lado los propios y característicos de la potestad de mando y disciplinaria, que ha sido asociada al derecho de propiedad y a la libertad empresarial y por otro los derechos que emanan del reconocimiento de que el trabajador es un ciudadano que está amparado constitucionalmente por la protección de su dignidad, libertad e igualdad.

c) Que, el aspecto procesal de la acción de tutela exige y requiere que el demandante proporcione a lo menos indicios suficientes para estimar que se han vulnerado sus derechos esenciales, tal como lo exige el artículo 493 del Código del Trabajo, existiendo esos indicios, corresponderá al demandado justificar su conducta. Así, no se trata de una inversión del onus probandi, ya que no basta la alegación de una lesión a un derecho fundamental, para que se traslade al empleador la carga probatoria, sino que sólo se alivia la posición del trabajador



exigiéndole un principio de prueba por el cual acredite indicios de la conducta lesiva, esto es, acredite hechos que generen la sospecha fundada y razonable de que ha existido esta lesión.

Luego de, reconocido lo anterior, es necesario, en consecuencia, determinar si el demandante cumplió con este estándar probatorio exigido, para lo cual el demandante no ha aportado indicio alguno de los hechos que denuncia, toda vez que ninguno de los testigos presentados al juicio hacen referencia alguna a los malos tratos, humillaciones, discriminación, etc. que relata en su libelo, toda vez que estos solo hacen mención a la prestación de los servicios, la fecha de inicio las funciones, etc.-

Por lo tanto, no es posible advertir indicios de vulneración alguna a las garantías que denuncia el actor.-

DECIMO: Que atendido todo lo antes razonado, no habiéndose aportado indicios, no es dable entonces que esta sentenciadora analice los requisitos de justificación, razonabilidad y proporcionalidad como lo establece el artículo 493 del Código del Trabajo, toda vez que no concurre el presupuesto esencial, cual es que exista algún tipo de presión o amenaza, o actos vulneratorios de sus garantías como denuncia el demandante, razón por la cual se procederá a rechazar la acción de tutela.-

UNDECIMO: Respecto al término de la relación laboral del demandante Alberto Catalán, y cumplimiento de las formalidades del artículo 162 del Código del Trabajo.

El artículo 162 del Código del Trabajo establece los requisitos para proceder a la desvinculación de un trabajador y prescribe en su inciso 1°: “ Si el contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 4,5 o 6 del artículo 159 o si el empleador le pusiere término por aplicación de una o más de las causales señaladas en el artículo 160, deberá comunicarlo por escrito al trabajador,



personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda”.

Que el demandante sostiene que fue despedido en forma verbal el 18 de diciembre de 2020, sin razón ni fundamento alguno.

Por su parte la demandada afirma que, el trabajador hizo abandono de sus funciones a mediados de diciembre de 2020, sin regresar.

De los testigos que concurrieron a declarar por ambas partes, solo doña María Ignacia Rodríguez afirma que en conversaciones supo del despido del actor, pero nada oficial. En tanto el señor Juan Olivas dice que el trabajador se quería ir porque estaba cansado.

En este escenario, y afirmando la demandada que el actor hizo abandono del trabajo, lo que correspondía era que cumpliera con los requisitos legales para formalizar el despido del actor, no resultando acorde a las reglas de la sana crítica, que un trabajador que presta servicios hace mas de 40 años, que además vive en el mismo edificio, decidiera abandonar el trabajo y renunciar a su indemnización.

Por lo anterior, se procederá a acoger la acción de despido injustificado deducida por el demandante Alberto Catalán.-

DUODECIMO: Que para los efectos del cálculo de las indemnizaciones se tendrá como remuneración del actor la suma de \$ 395.000 mensuales, que se condice con el certificado de cotizaciones de FONASA de 18 de diciembre de 2020, y con los detalles de gastos comunes, del último período en que aparece dicho monto como sueldo del demandante de autos.-

DECIMO TERCERO: Que en lo referente al lucro cesante que reclama el actor, señala en su libelo: “De acuerdo a ello la terminación anticipada de mi contrato, el cual era indefinido.



El incumplimiento se hace más grave aun cuando no ha existido ninguna causal legal para dicho término anticipado, es más, las motivaciones y la forma en que se produjo el despido han vulnerado seriamente mis derechos fundamentales, tal como ya se ha explicado latamente en el cuerpo de este escrito.

Lo anterior me hace legítimo acreedor de todo aquello que habría debido percibir si no se hubiese producido el incumplimiento aludido, esto por la vulneración a las normas de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo y al artículo 1556 del Código Civil.

Hoy me encuentro cesante.

Es por todo lo expuesto que vengo en solicitar que se condene a la demandada al pago por concepto de lucro cesante del monto equivalente a mi remuneración por todos los meses desde que fui despedido hasta que la sentencia de autos quede ejecutoriada y la parte demanda haya cumplido es decir el equivalente a \$ 595.000 que fue mi última remuneración, o lo que US., estime en justicia lo que da en total la suma de \$26.775.000, más todas las remuneraciones que se devenguen en el transcurso del juicio”.-

Que el lucro cesante puede ser definido como una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima como consecuencia del daño, que ésta se habría producido si el evento dañoso no se hubiera verificado.

Que en el caso sub lite, nada de ello ha ocurrido, toda vez que el hecho de poner término a la relación laboral o despido, se ha establecido por el legislador las indemnización por aviso previo y por años de servicios. Además, el actor alega un supuesto despido “anticipado”, desconociéndose a qué anticipación se refiere, pues se trata de un contrato de naturaleza indefinida.-

En virtud de todo lo anterior se procederá al rechazo de la demanda en este punto.-



DECIMO CUARTO: Respecto de las horas extras y daño moral que se demandan, no habiéndose cumplido con lo dispuesto del artículo 446 N° 4 y 5 del Código del Trabajo, no se hará lugar a dicho concepto.-

DECIMO QUINTO: En relación al feriado que reclama el actor, no habiéndose acreditado con el correspondiente comprobante de otorgamiento de feriado, se hará lugar a este solo por dos períodos que no se encuentran prescritos.-

DECIMO SEXTO: Que la prueba aportada ha sido analizada conforme a las reglas de la sana crítica, sin alterar los principios de la lógica ni las máximas de la experiencia de este Tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 456 del Código del Trabajo; y el resto de las alegaciones y probanzas no contienen información que contradiga aquellos hechos asentados por los medios que se han tenido en consideración para resolver la presente controversia.

Visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 9, 159 N° 2, 177, y 446 a 462, 485 y siguientes del Código del Trabajo, SE DECLARA:

- I- Que SE ACOGE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION.
- II- Que se RECHAZA LA ACCION DE TUTELA.
- III- Que SE RECHAZA LA DEMANDA RESPECTO DEL ACTOR RODRIGO PAZ CATALAN.
- IV- Que se **ACOGES LA DEMANDA POR DESPIDO INJUSTIFICADO respecto de don ALBERTO CATALAN VARGAS y PARCIALMENTE LA DEMANDA POR COBRO DE PRESTACIONES**, por lo que la demandada COMUNIDAD EDIFICIO ENRIQUE MAC IVER 544, deberá pagarle las siguientes sumas:

a) \$ 395.000 por indemnización de aviso previo.-

b) \$ 17.775.000 por indemnización por años de servicios (45 años).-



c) \$ 8.887.500 por recargo legal del artículo 168 letra b) del Código del Trabajo.-

d) \$ 552.972 por feriado legal (42 días).-

V.-Que las sumas ordenadas pagar lo serán con los reajustes e intereses que disponen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.-

VI.- Ejecutoriada que este la presente sentencia, cúmplase con lo dispuesto en ella, dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional para seguir con el cumplimiento ejecutivo.-

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT N° T-255-2021.-

RUC N° 21-4-0322021-0.-

Dictada por doña CARMEN GLORIA CORREA VALENZUELA,
Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago a diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

